



Superservicios
Superintendencia de Servicios
Públicos Domiciliarios



**TODOS POR UN
NUEVO PAÍS**
PAZ EQUIDAD EDUCACIÓN



GD-F-008 V.9

Página 1 de 8

RESOLUCIÓN No. SSPD - 20174010232865 DEL 29/11/2017

“Por la cual se resuelve un recurso de reposición”

LA DIRECTORA TÉCNICA DE GESTIÓN DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO

En ejercicio de las atribuciones conferidas en el parágrafo del artículo 4° de la Ley 1176 de 2007, en el artículo 2.3.5.1.2.1.5. del Decreto 1077 de 2015, en la Resolución No. SSPD 20171300104825 de 2017, la Ley 1437 de 2011 y,

CONSIDERANDO:

1. ANTECEDENTES

Que la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios (SSPD) de conformidad con lo previsto en el parágrafo del artículo 4° de la Ley 1176 de 2007, mediante la cual “*se desarrollan los artículos 356 y 357 de la Constitución Política y se dictan otras disposiciones*”, es la entidad competente para adelantar el proceso de certificación relacionado con la administración de los recursos del Sistema General de Participaciones para agua potable y saneamiento básico (SGP-APSB) o de retirarla según sea el caso, a los distritos y municipios del país.

Que el artículo 2.3.5.1.2.1.5. del Decreto 1077 de 2015, estableció que “*La Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios adelantará el proceso de certificación de acuerdo con lo establecido en el parágrafo del artículo 4° de la Ley 1176 de 2007*”.

Que el Superintendente de Servicios Públicos mediante Resolución No. SSPD 20171300104825 de 29 de junio del 2017, delegó en la Directora Técnica de Gestión de Acueducto y Alcantarillado, entre otras funciones, la de expedir los actos administrativos a través de los cuales se certifique o descertifique a los municipios y distritos, en lo relacionado con la administración de los recursos del Sistema General de Participaciones para Agua Potable y Saneamiento Básico, aclarar dichos actos y resolver los recursos que contra ellos se presenten.

Que mediante Resolución No. SSPD 20174010143615 del 17 de agosto de 2017, la SSPD decidió DESCERTIFICAR al municipio de SAN PELAYO en el departamento del CÓRDOBA, por no haber cumplido el siguiente requisito previsto en el artículo 2.3.5.1.2.1.6. del Decreto 1077 de 2015:

- “*Reporte en el SUI del estrato asignado a cada inmueble residencial urbano, en el formato habilitado para la vigencia respectiva*”

Que, la Resolución No. SSPD 20174010143615 del 17 de agosto de 2017, fue notificada por aviso, el 15 de septiembre de 2017.



061

Que, mediante escrito radicado bajo el número 20175290808372 del 29 de septiembre de 2017, el ente territorial interpuso oportunamente recurso de reposición en contra de la resolución de descertificación.

2. ARGUMENTOS DEL MUNICIPIO Y PRUEBAS APORTADAS Y DECRETADAS EN EL TRÁMITE DEL RECURSO DE REPOSICIÓN

2.1 Como argumentos del recurso, se alegaron los siguientes por parte del ente territorial.

- Afirma el recurrente, que la decisión de descertificación se encuentra afectada por criterios de forma y de fondo que van en contradicción con lo establecido por el Decreto 1077 de 2015, frente a las situaciones presentadas para la vigencia 2016, y que, por tanto, dicha decisión afecta la gestión de las políticas de los servicios públicos.

- Aduce que el reporte solicitado no es responsabilidad directa del ente territorial, puesto que realizó las gestiones necesarias para la realización del mismo, ante lo cual, posteriormente agrega que con el propósito de adelantar el reporte, la alcaldía solicitó a la empresa prestadora de los servicios la respectiva información, para lo cual relaciona los oficios remitidos y que existe una responsabilidad compartida del operador, pues es de éste último que depende la homologación predial catastral.

- Indica que el municipio de San Pelayo requiere procesos de mejoras orientados hacia la organización de los servicios públicos, sin embargo, los atrasos que se presentan frente al manejo de los recursos por parte de la Gobernación, no garantizan el giro oportuno de los recursos destinados a los subsidios del prestador de los servicios.

- Manifiesta que el citado decreto establece diversas formas para acreditar el cumplimiento de los requisitos, como en vigencias anteriores. Así con el reporte de la certificación expedida por el comité permanente de estratificación, se acreditó la aplicación de la estratificación socioeconómica.

- Otro de sus argumentos se centra en indicar que el ente territorial adelantó el cargue de la información para la vigencia 2016, y la que se encontraba pendiente para la vigencia anterior, sin embargo, aduce se presentaron afectaciones dado que, al momento de realizar dichos reportes, los formatos se encontraban deshabilitados en la plataforma SUI, por lo cual envió mesas de ayuda identificadas con los Nos. 366437 y 364285, y vía telefónica solicitó aclaraciones sobre el reporte de estratificación y coberturas.

- Alude que en varias ocasiones se informó al Grupo SUI sobre los problemas presentados en la plataforma para el cumplimiento en los plazos señalados, pues con ello se afectaron los tiempos de preparación de dicho reporte, teniendo en cuenta que la implementación del nuevo código predial catastral no está adelantado por parte el operador de los servicios públicos en el municipio de San Pelayo.

- Posteriormente señala que no comprende la decisión de descertificación para la vigencia 2016, dado que subsanó todos los incumplimientos encontrados para la dicha vigencia, al igual que para la vigencia anterior y por tanto el requisito no debía tenerse como no cumplido.

Por lo anterior, solicita se evalúen los criterios de la descertificación del municipio, y que se reconsideren los hechos y situaciones expuestas, con el fin de no afectar la gestión y manejo de los recursos. Solicita igualmente, sea tenida en cuenta la situación expuesta en relación con el SUI.

2.2. De las pruebas aportadas con el recurso de reposición.

Con el radicado No. SSPD 20175290808372 del 29 de septiembre de 2017, por medio del cual se sustentó el recurso de reposición, no se allegaron documentos para ser tenidos en cuenta como pruebas.

2.3 De las pruebas decretadas con ocasión al recurso de reposición

Teniendo en cuenta los argumentos esbozados por municipio en su recurso de reposición, este Despacho profirió auto de pruebas No. 20174010002706 del 10 de noviembre de 2017, mediante el cual ordenó lo siguiente:

*"(...) **ARTÍCULO PRIMERO. - DECRETAR** de oficio la siguiente prueba:*

1. Requerir a la Dirección General Territorial de esta Superintendencia, para que informe:

- Si el municipio de San Pelayo – Córdoba, tiene habilitado para reporte el formato de estratificación y coberturas de la vigencia 2016. De ser afirmativa su respuesta, señale desde qué fecha se encuentra habilitado.*
- Si el ente territorial a la fecha, reportó el formato de estratificación y coberturas de la vigencia 2016. De ser afirmativa su respuesta señale la fecha de reporte. (...)"*

El referido auto fue comunicado al ente territorial mediante radicado No. 20174011622131 del 10 de noviembre de 2017, ante lo cual el municipio se pronunció con oficios Nos. 20175290994172 del 21 de noviembre de 2017 y 20175291004062 del 23 de noviembre de la presente anualidad, allegando documentación para ser tenida en cuenta dentro del proceso.

Por medio del memorando No. 20178000115703 del 23 de noviembre de 2017, la Dirección General Territorial – DGT de esta Superintendencia, dio respuesta a lo requerido por este Despacho.

Posteriormente mediante oficio No. 20174011708561 del 24 de noviembre de 2017, esta Dirección procedió a incorporar al expediente y a trasladar al ente territorial, la contestación de la DGT, con el fin que, si a bien lo tenía, se pronunciara respecto de la misma, no obstante, el recurrente no se pronunció sobre el particular.

3. ANÁLISIS DE LOS ARGUMENTOS

Para determinar si le asiste razón a la parte recurrente, esta SSPD procederá a analizar los argumentos expuestos en el escrito de reposición, lo cual efectuará de la siguiente manera:

- De los argumentos relacionados con la presunta afectación de la decisión, por criterios de forma y de fondo, y la afectación en la gestión de políticas de los servicios públicos del municipio, debido al manejo de los recursos por parte de la Gobernación.

En primer lugar, debe recordarse que el municipio fue descertificado, toda vez que incumplió el requisito de reporte al SUL del estrato asignado a cada inmueble residencial urbano, en el formato habilitado para la vigencia 2016, debido a que no realizó dicho cargue en el plazo establecido para ello.

Ahora bien, ante las manifestaciones del recurrente, es oportuno señalar que, frente a los vicios propios del acto jurídico, la Corte Constitucional en Sentencia C- 501 del 15 de mayo de 2001, se refirió al vicio de forma como *"aquellas irregularidades en que se incurre en el trámite que antecede a la promulgación de la ley y que ha sido establecido por el constituyente. Ello es así por cuanto la forma es el modo de proceder de una cosa, la manera como se hace (...)* Por ello, los vicios en la formación de la ley se circunscriben a la manera como fueron debatidas, aprobadas y promulgadas las disposiciones legales. y en cuanto al vicio de fondo ha indicado, que *"los vicios materiales o de fondo, que se predicen de la esencia del acto jurídico y que sí afectan su contenido (...)"*

Así las cosas, dentro del proceso de certificación para la administración de recursos del SGP - APSB de la vigencia 2016, para el municipio de San Pelayo – Córdoba resuelto mediante acto administrativo No. SSPD 20174010143615 del 17 de agosto de 2017, no se advierte ninguna irregularidad que afecte de manera parcial o definitiva dicho acto, pues el mismo fue expedido con estricta observancia de las ritualidades y etapas propias del procedimiento, como puede ser claramente corroborado en el expediente No. 2017401351600512E en el cual consta la actuación debidamente adelantada.

Igualmente se evidencia sin lugar a duda, que el acto administrativo recurrido no adolece de irregularidades de tipo sustancial que afecten su contenido, o vicien la decisión allí establecida,

268

la cual fue proferida luego de efectuar el respectivo análisis de todos y cada uno de los requisitos señalados en el artículo 2.3.5.1.2.1.6. del Decreto 1077 de 2015, y las demás normas concordantes, luego de lo cual se pudo determinar que el municipio de San Pelayo en el departamento de Córdoba, no cumplió con los requisitos necesarios para que ésta SSPD expidiera la certificación a que se refiere el parágrafo del artículo 4º de la Ley 1176 de 2007.

De otra parte, en lo que respecta a la afectación de la gestión de las políticas de los servicios públicos por la decisión recurrida y a la necesidad de procesos de mejoras orientados hacia la organización de los servicios públicos del municipio, que según lo afirma el recurrente, se ven igualmente afectadas por los atrasos frente al manejo de los recursos por parte de la Gobernación, es de indicar que, el proceso bajo estudio, tiene como propósito realizar el estudio de la información que es reportada por el municipio al Sistema Único de Información SUI-, para acreditar el cumplimiento de los requisitos establecidos en el Decreto 1077 de 2015, de cuyo análisis se desprende la decisión de certificar o descertificar al ente territorial.

Así las cosas, si de la evaluación que se efectúa se avizora algún incumplimiento en la información reportada, de cara a lo exigido por la norma, así debe ser reconocido por este Despacho, decisión que trae como consecuencia la descertificación del ente territorial, como ocurre en el presente caso, y ante el incumplimiento probado, los recursos del SGP – APSB que son en primera medida destinados al municipio, serán trasladados al ente departamental para su administración, quien por imposición normativa y dada esta circunstancia, será el encargado de garantizar la prestación eficiente de los servicios públicos en el respectivo municipio.

En consecuencia, no es de recibo para este Despacho que el recurrente argumente a su favor que por culpa de la decisión recurrida se generan afectaciones a los servicios públicos y de las gestiones de mejoramiento para el municipio, pues es su obligación acreditar para cada vigencia el cumplimiento de los requisitos exigidos por la norma a fin de obtener la certificación relacionada con la administración de los recursos del Sistema General de Participaciones para agua potable y saneamiento básico, y no pretender trasladar las consecuencias propias de su incumplimiento a esta Entidad.

- De las manifestaciones relacionadas con la falta de responsabilidad directa del ente territorial en el reporte solicitado y la responsabilidad compartida con el operador de servicios públicos, dada su obligación frente a la homologación predial catastral, y del adelantamiento de las gestiones necesarias por parte del ente territorial para la realización del mismo.

Frente a lo aquí argumentado por el recurrente, se debe precisar que dentro del presente estudio no se encuentra en debate la atribución de la responsabilidad frente al cumplimiento de los requisitos propios del proceso de certificación para la administración de recursos del SGP - APSB de la vigencia 2016, pues el parágrafo del artículo 4º de la Ley 1176 de 2007, señala de manera expresa que los municipios y distritos tiene la obligación de reportar la información requerida para acreditar el cumplimiento de los requisitos propios del proceso, veamos:

"(...) PARÁGRAFO. La Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios será la entidad competente para adelantar el proceso de certificación o retirarla, según sea el caso, a los distritos y municipios en el aseguramiento de la prestación eficiente de los servicios públicos de agua potable y saneamiento básico.

Los distritos y municipios están en la obligación de reportar a la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios la información requerida. (...)"

Por su parte, el Decreto 1077 de 2015, establece que los requisitos contemplados en su artículo 2.3.5.1.2.1.6., deben ser acreditados y cumplidos por los municipios y distritos, veamos:

"(...) ARTICULO 2.3.5.1.2.1.6. Requisitos generales para los municipios y distritos. Para los municipios y distritos de todas las categorías se verificará cada año, empezando con la vigencia 2013 la cual será evaluada en el año 2014 y así sucesivamente, el cumplimiento de los requisitos que se establecen a continuación (...)"

Nótese, para el caso que nos ocupa, que es el municipio quien por imposición normativa debe efectuar el respectivo reporte de la información y por ende, debe llevar a cabo todas las gestiones tendientes para acreditar su cumplimiento, en los plazos establecidos para ello, con el

propósito de obtener la certificación, y por ende, es al ente territorial a quien esta Entidad le evalúa la información reportada, no al operador de los servicios públicos domiciliarios.

En efecto, contrario a lo argumentado en su recurso, el municipio si es el responsable directo de esta gestión, y en caso de advertir la necesidad de un trámite ante un tercero, como lo es el relacionado con el código predial catastral, es su deber adelantar las acciones necesarias para tal fin, por tanto, los oficios allegados por el recurrente, dirigidos al prestador de los servicios públicos, así como sus manifestaciones relacionadas con una posible responsabilidad compartida con dicho prestador, no logran desvirtuar el incumplimiento del requisito bajo estudio.

- Del argumento según el cual el reporte de la certificación expedida por el Comité Permanente de Estratificación, acredita el requisito incumplido dadas las diversas formas de acreditarlo.

En atención a lo anterior, es de señalar que la norma anteriormente citada, por la cual se establece el cumplimiento del requisito que nos ocupa, determina que el aspecto "*Aplicación de la estratificación socioeconómica, conforme a la metodología nacional establecida*" cuenta con 3 requisitos que deben ser cumplidos a cabalidad por el ente territorial para cada vigencia, los cuales se establecen así:

- *Reporte en el SUI el decreto mediante el cual se adopta la estratificación urbana.*
- *Reporte en el SUI del estrato asignado a cada inmueble residencial urbano, en el formato habilitado para la vigencia respectiva, y*
- *Reporte en el SUI de la certificación expedida por la Secretaría Técnica del Comité Permanente de Estratificación Municipal o Distrital o quien haga sus veces, en la que conste que la estratificación aplicada en la vigencia a certificar está conforme a la metodología nacional establecida.*

Por consiguiente, no es cierto que la norma establezca para este aspecto en particular, distintas formas para su acreditación, pues cada uno de ellos, debe ser cumplido conforme a lo allí establecido. Para el requisito bajo análisis, esto es, *Reporte en el SUI del estrato asignado a cada inmueble residencial urbano, en el formato habilitado para la vigencia respectiva*, solamente se puede considerar válidamente acreditado con el reporte del formato de Estratificación y Coberturas habilitado en la vigencia 2016.

En consecuencia, el referido requisito no cuenta con una manera alternativa para su observancia, como equivocadamente lo señala el recurrente al afirmar que, con el reporte de la certificación expedida por la Secretaría Técnica del Comité Permanente de Estratificación, puede darse por cumplido el reporte del REC vigencia 2016.

- Del cargue de la información para la vigencia 2016 y las presuntas afectaciones presentadas al momento de realizar dichos reportes por no hallarse habilitados, de las mesas de ayuda identificadas con los Nos 366437 y 364285, y la solicitud de aclaraciones sobre el reporte de estratificación y coberturas.

Tal y como se señaló en el acápite 2.3 del presente acto administrativo, teniendo en cuenta las afirmaciones del recurrente, mediante Auto No. 20174010002706 del 10 de noviembre de 2017, esta Superintendencia procedió a decretar pruebas dentro del proceso del asunto, solicitando a la Dirección General Territorial de esta Entidad, allegara información relacionada con el reporte del formato de estratificación y coberturas de la vigencia 2016.

Dicho auto fue comunicado al municipio, quien mediante oficios Nos. 20175290994172 y 20175291004062 del 21 y del 23 de noviembre de 2017, se pronunció frente a lo comunicado, reiterando los argumentos de su escrito de recurso.

Así mismo, en respuesta a lo solicitado por este Despacho, la DGT remitió el memorando número 20178000115703, el cual fue debidamente trasladado al recurrente mediante oficio No. 20174011708561 del 24 de noviembre de 2017, para que, si a bien lo tenía, se pronunciara respecto de la misma, sin embargo, el ente territorial no se pronunció frente al traslado realizado.

Claro lo anterior, y teniendo en cuenta el argumento del recurrente, según el cual los formatos se encontraban deshabilitados en la plataforma SUI al momento de su reporte, en la respuesta trasladada la Dirección General Territorial de esta Entidad señaló:

“(…) - Si el municipio de San Pelayo – Córdoba, tiene habilitado para reporte el formato de estratificación y coberturas de la vigencia 2016. De ser afirmativa su respuesta, señale desde qué fecha se encuentra habilitado.

Al municipio de San Pelayo Córdoba se le habilitó el cargue del Reporte de Estratificación y Coberturas desde el 04 de noviembre de 2016. (...)”

Se concluye de lo anterior, que el municipio de San Pelayo tenía habilitado el cargue del reporte de estratificación y coberturas, **desde el 04 de noviembre de 2016**, hecho que desvirtúa claramente lo argumentado por el municipio, pues se deriva de la verificación realizada por la DGT, sin lugar a duda, que el ente territorial si contaba con la habilitación respectiva para proceder con el reporte del formato de estratificación y coberturas de la vigencia 2016, cargue que según el plazo establecido por el artículo 2.3.5.1.2.1.9 del Decreto 1077 de 2015 y la Resolución No. 0222 del 26 de abril de 2017 debió efectuarse hasta el 2 de junio de 2017, lo cual no fue acatado por el municipio.

Ahora bien, en consideración a lo afirmado por el recurrente, respecto de las mesas de ayuda, este Despacho procedió a verificar en el SUI-, encontrando que la solicitud identificada con el No. 366437 está referida al *"Formulario de Información General del Servicio de Alcantarillado"* no al reporte de la información que nos ocupa, como se aprecia en la siguiente imagen.

<input type="checkbox"/> Replicados <input type="checkbox"/> Por Escalar <input type="checkbox"/> Escaladas <input type="checkbox"/> En Asesor <input type="checkbox"/> Resueltas	Servicio: ALCALDÍAS Aplicación: FABRICA Fecha Ingreso: 22-05-2017	Norma: SIN ASIGNAR (*) Tipo: TECNICA Fecha Cierre: 15-06-2017
Solicitante: _____ Empresa: _____ Contacto: _____ (Código)	CONSON BERTEL Señores Grupo SUI Buenos Días	INGRESADA 23-05-2017/23:06:17
La presente es para solicitar su colaboración aclarándonos lo referente a este Error al intentar cargar el Formulario de Información General del Servicio de Alcanceado en el Municipio.		
No se pudo radicar el formulario Error al almacenar la pla. ORA-01430: valor mayor que el que permite la precisión especificada para esta columna.		
Se asigna para tramite pertinente gracias		
Respetado Señor BERTEL		
He recibido su Solicitud N° 36643780		
Al respecto me permito informarle que el error del formulario ALCAL-0004 Información General del Servicio de Alcanceado en el municipio YA 20161 se genera ya que al campo % de tipo de alcanceado urbano, el sistema solo permite registrar máximo 2 enteros y 1 decimal.		

En lo que respecta a la mesa de ayuda identificada con el No. 364285 se evidenció lo siguiente:

[illegible]

SULLORS SALAMANCA responde: 27-04-2017 11:20:37

Buenos Días

Respetado Sr. Moreno

He recibido su mesa de ayuda 364285 BC

Al respecto me permito informarle que deba tener en cuenta

Resolución N° SSPD - 20169300052145 del 30 de septiembre de 2016

Por la cual se modifica la Resolución Comptatoria SSPD 20101300045765 DEL 14 de Diciembre de 2010 la Resolución SSPD 20131300008055 del 01 de abril de 2013 respecto al Formato Reporte de Estratificación y Coberturas y se incluye en el Número Predial Nacional referido en la Resolución IGAC 070 del 04 de Febrero de 2011 en el Sistema Único de Información - SUI.

/ Resolución N° SSPD - 20161300019435 del 11 de julio de 2016

Por medio de la cual se modifica el Capítulo 2 del Anexo de la Resolución SSPD 20151300054195 de 2015, relacionado con la información a cargar en el Sistema Único de Información por parte de las alcaldías municipales y distritales

Resolución N° SSPD 20151300054195 del 15/12/2015

La Superintendencia de Servicios Públicos presenta a las alcaldías municipales y distritales a las autoridades ambientales y demás interesados la Resolución 20151300054195 del 15 de diciembre de 2015 "Por medio de la cual se modifica parcialmente la Resolución SSPD 20101300048765 del 14 de diciembre de 2010 respecto de la información a cargar en el Sistema Único de Información - SUI, por parte de las alcaldías municipales y

De lo anterior se desprende que la mesa de ayuda fue oportunamente atendida, indicándole al municipio la normatividad que debía tener en cuenta al momento de efectuar el reporte, máxime cuando tenía habilitado el cargue del formato de Estratificación y Coberturas desde el 04 de noviembre de 2016.

A lo anterior se suma, como se indica en la respuesta dada por la DGT "Se consulta el sistema Documental Orfeo y el aplicativo de mesa de ayuda y no se evidencian soportes que reporten errores en el SUI de la Alcaldía", la afirmación del municipio según la cual se presentó afectación al momento de intentar realizar el cargue del citado formato, carece de veracidad y no está llamada a prosperar

Finalmente, teniendo en cuenta lo manifestado en memorando número 20178000115703 con respecto a la pregunta acerca de si el ente territorial a la fecha había reportado el formato de estratificación y coberturas de la vigencia 2016, se señaló:

"(...) A la fecha el municipio presenta el cargue en estado PENDIENTE, por lo tanto, no certificó el formato dentro de los plazos previstos en la Resolución 222 del 26 abril de 2017, "Por la cual se determina el plazo para el cumplimiento de los requisitos del proceso de certificación, para la vigencia 2016, de conformidad con el parágrafo 2 del artículo 2.3.5.1.2.1.9. del capítulo 1, del título 5, de la parte 3, del libro 2, del Decreto Único Reglamentario del Sector Vivienda, Ciudad y Territorio, Decreto 1077 del 26 de mayo de 2015, tal como se visualiza en la siguiente imagen:

Formato de Estratificación y Coberturas	1 A 2016	Pendiente

En este orden de ideas es evidente que el ente territorial aún no ha reportado la información por la cual se descertificó respecto de la vigencia 2016, por lo que resulta indiscutible su inobservancia a los términos y procedimientos establecidos para reportarla, los cuales le son de obligatorio cumplimiento dentro del proceso de certificación.

Así las cosas, no es cierto que el recurrente haya subsanado todos los incumplimientos encontrados para la vigencia 2016, y, por tanto, el requisito no puede tenerse como cumplido, como lo pretende el ente municipal.

En consecuencia, para el Despacho es claro que los argumentos esgrimidos por el recurrente no tienen la vocación jurídica para controvertir lo decidido en la resolución de descertificación, lo que ratifica el incumplimiento del requisito de "Reporte en el SUI del estrato asignado a cada inmueble residencial urbano, en el formato habilitado para la vigencia respectiva." y, en consecuencia, no se accede a reponer la resolución objeto de recurso, y por el contrario será confirmada.

En mérito de lo expuesto, la Directora Técnica de Gestión de Acueducto y Alcantarillado,

RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO. - CONFIRMAR la Resolución No. SSPD 20174010143615 del 17 de agosto de 2017, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva del presente acto administrativo.

ARTÍCULO SEGUNDO. - NOTIFICAR personalmente de la presente Resolución al alcalde del municipio de SAN PELAYO en el departamento de CÓRDOBA, haciéndole entrega de una copia de la misma, y advirtiéndole que contra ésta no procede recurso alguno. De no ser posible la notificación personal, se debe dar aplicación al artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (Ley 1437 de 2011).

ARTÍCULO TERCERO. - COMUNICAR, una vez en firme, el contenido de la presente Resolución al gobernador del departamento de CÓRDOBA, al Departamento Nacional de Planeación, al Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio y al Ministerio de Hacienda y Crédito Público y publicar en la página web de la SSPD.

ARTÍCULO CUARTO. - La presente Resolución rige a partir de la fecha de su ejecutoria.




NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE

Dada en Bogotá, D. C.



BIBIANA GUERRERO PENARETTE

Directora Técnica de Gestión de Acueducto y Alcantarillado

Proyectó: Patricia Moreno M – Abogada – Contratista Grupo de Certificaciones e Información 
Revisó: Vanessa Benavides – Abogada – Grupo de Certificaciones e Información 
Aprobó: Olga Rocio Yanquen Caro – Coordinadora del Grupo de Certificaciones e Información 
Expediente: 2017401351600512E